

BALANCE Y PRIORIDADES DE POLITICA ECONOMICA

Federico Prades
Asesor Económico de la AEB

El balance de la situación.

Desde mediados del pasado año la economía española ha entrado en una fase de recesión. El crecimiento del PIB real de 1992 quedó reducido a un 1 por ciento y su variación intertrimestral fue negativa durante los dos últimos trimestres del pasado año situándose, elevada la tasa anual, en un -0,7 y un -1,6 por ciento respectivamente. Dicho deterioro tuvo un marcado impacto sobre el empleo, dando lugar a una destrucción de 413 mil puestos de trabajo a lo largo del ejercicio.

Por lo que a la evolución de los equilibrios básicos se refiere, se advierte una mejora en el control de la inflación y de su diferencial respecto a los países de nuestro entorno. No obstante, dicha mejora se debe en gran parte a la desaparición de los efectos derivados del aumento de la imposición indirecta y al debilitamiento de la actividad, sin olvidar que la inflación subyacente continúa situándose en un nivel excesivamente elevado. La desaceleración de la demanda interna ha propiciado una reducción del peso del déficit exterior aunque, también en este caso, su nivel continúa situándose en cotas particularmente elevadas. Debido al juego de los estabilizadores automáticos, la evolución y perspectivas del déficit público son claramente más sombrías. La persistente fragilidad de la peseta y el mantenimiento de unos tipos de interés excepcionalmente elevados que exige su defensa constituyen igualmente motivos de preocupación.

Las causas del deterioro.

Parte del deterioro experimentado por nuestra economía se debe al empeoramiento de la coyuntura internacional y más particularmente en Europa. El elevado coste de la reunificación alemana y la elevación de sus tipos de interés han influido muy negativamente sobre los restantes países miembros. En igual sentido han incidido los efectos derivados de la profunda crisis del Sistema Monetario Europeo (SME) y las crecientes dificultades que plantea la construcción de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

No obstante, el acentuado deterioro de nuestros resultados responde, en su mayor parte, a problemas de orden interno y cuyo origen se encuentra en la acusada erosión de la competitividad y de la rentabilidad que, a lo largo de los últimos años, han venido sufriendo nuestras empresas. A su vez, dicha pérdida de competitividad y de rentabilidad encuentra sus raíces en el excesivo aumento de los costes internos de producción, la sobrevaloración de la peseta y la excesiva rigidez de nuestros mercados. Como circunstancia agravante debe señalarse que el carácter expansivo de la política presupuestaria ha dificultado notablemente el proceso de ajuste de los desequilibrios y ha hecho recaer un peso excesivo sobre la política monetaria. Por consiguiente, el ajuste de los desequilibrios se ha producido a través de una reducción de la actividad y del empleo.

¿Un fracaso de la política económica?

Ante esta situación, no son pocos los analistas que consideran que la política económica diseñada por el Gobierno ha sido errónea y que, por lo tanto, es necesario plantear nuevas alternativas. Esta conclusión, sin más matizaciones, no resulta plenamente satisfactoria. En efecto, frente a un planteamiento básicamente correcto de los objetivos y de las prioridades, el problema fundamental reside, sobre todo, en el incumplimiento de las políticas destinadas a alcanzarlos.

Así, por parte de los interlocutores sociales, la continuada recomendación de mantener una moderación de los costes laborales con el fin de reducir la presión sobre los precios y de potenciar la competitividad y la rentabilidad de las empresas no se ha plasmado absolutamente en los hechos.

Por lo que a la política presupuestaria se refiere, los incumplimientos han sido notables. El gasto público ha desbordado sistemáticamente el presupuesto inicial, lo que ha contribuido a alimentar el déficit público sin aprovechar, como hubiera sido prudente y aconsejable, los períodos de expansión y de mayor nivel de ingresos. Con ello, se ha mantenido la presión de la demanda final y se ha hecho recaer un peso desproporcionado sobre la política monetaria.

El mantenimiento de un tipo de cambio nominal fijo frente al continuo deterioro del tipo de cambio real ha contribuido al debilitamiento de nuestra competitividad y ha resultado, como los hechos han venido a demostrar, finalmente insostenible.

En este contexto, la política monetaria ha debido instrumentarse bajo los imperativos de contribuir a la reducción de la inflación y de garantizar el mantenimiento del tipo de cambio nominal de la peseta lo que, junto con la ausencia de un apoyo por parte de la política presupuestaria, no ha dejado otra salida que la elevación de los tipos de interés con todo el coste económico que ello conlleva.

Las perspectivas a corto plazo.

La información disponible de los indicadores económicos correspondiente a los primeros meses del presente ejercicio apuntan hacia un progresivo debilitamiento de la actividad y de la demanda con un marcado impacto sobre el empleo.

Ello, junto con la ausencia de unas perspectivas de recuperación significativa en el área comunitaria y de razones sobre las que fundamentar un relanzamiento del consumo privado y de la inversión, hacen prever que el crecimiento del PIB durante el presente ejercicio difícilmente podrá alcanzar una tasa positiva. Consecuentemente, las proyecciones en materia de empleo son particularmente negativas pudiendo preverse una disminución de la ocupación superior a las 300 mil personas, lo que situaría la tasa de paro en un nivel próximo al 22 por ciento. Las mejoras pueden ser apreciables en lo que a la reducción de la tasa de inflación y del peso del déficit por cuenta corriente se refiere, mientras que las perspectivas son negativas en el caso del déficit público ya que los estabilizadores automáticos jugarán desfavorablemente.

Las prioridades de la política económica.

Recuperar a corto plazo una senda de crecimiento capaz de generar empleo requiere, como tarea prioritaria, dotar a nuestras empresas de un nivel adecuado de rentabilidad y de

competitividad, es decir, de unos costes internos y de un tipo de cambio que permita dar salida, tanto en los mercados internos como externos, a los productos y servicios que están capacitados para producir.

A tal efecto, la moderación de los costes salariales unitarios se presenta como un elemento crucial para reducir la presión sobre los precios, para dar cabida a una recuperación de los márgenes de rentabilidad y para aumentar el grado de utilización de los factores de producción actualmente disponibles.

El necesario descenso de los tipos de interés internos y de su diferencial respecto a los países de nuestro entorno vendrá fundamentalmente determinado por el control del déficit público y por la recuperación de la estabilidad del tipo de cambio de la peseta. La progresiva reducción del peso del déficit público (principalmente en su componente estructural dado el actual contexto recesivo) permitiría reducir la demanda sobre los escasos fondos disponibles y restaría protagonismo a la política monetaria. La recuperación de la credibilidad del tipo de cambio de nuestra divisa, y por lo tanto de los determinantes de su valor real, posibilitaría la eliminación del "premio" que actualmente deben incorporar los activos denominados en pesetas. A este respecto, resulta sumamente difícil saber si su cotización actual es adecuada y sostenible pero, lo que sí resulta a todas luces evidente es que, una nueva devaluación exigiría la adopción de medidas de acompañamiento restrictivas adicionales destinadas a hacer efectiva la modificación del tipo de cambio.

Por último, la puesta en marcha y la extensión de las reformas estructurales expuestas en el Programa de Convergencia dirigidas a flexibilizar los diferentes mercados -principalmente del mercado laboral-, y a potenciar la competencia entre los productores -particularmente de servicios-, se presentan como medidas de urgente adopción con el fin de alcanzar una mejor y mayor utilización de los recursos disponibles y de reducir los precios y costes en nuestra economía.